vinetur

El vino concentra más de 1.000 millones anuales en intervenciones específicas de la PAC

Italia, Francia y España reúnen alrededor del 75% de la financiación vitivinícola reservada por la Unión Europea

miércoles 16 de septiembre de 2026



La Política Agrícola Común no reparte su apoyo de la misma forma entre el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas. El vino es el único de los tres grandes subsectores con una intervención sectorial propia y un presupuesto reservado. La cerveza y los destilados reciben, sobre todo, un efecto indirecto a través de las ayudas a cereales, lúpulo y otras materias primas. Esa diferencia ya ordena la PAC 2023-2027 y será una de las claves de la negociación del período 2028-2034, que seguía abierta este miércoles, 16 de septiembre.

La PAC vigente entró en aplicación el 1 de enero de 2023 con los planes estratégicos de los Estados miembros. Cuenta con unos 386.600 millones de euros dentro del marco financiero 2021-2027. De esa cantidad, unos 291.100 millones corresponden al Fondo Europeo Agrícola de Garantía, que paga ayudas directas y medidas de mercado, y 95.500 millones al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, incluida la financiación de NextGenerationEU. El sistema combina apoyo a la renta, eco-regímenes, ayudas asociadas a algunas producciones, intervenciones sectoriales y desarrollo rural.

La diferencia entre beneficiario jurídico y beneficiario económico es una de las claves para leer estas cifras. Una cervecera no pasa a ser beneficiaria de la PAC porque su proveedor de cebada cobre pagos directos, del mismo modo que una destilería no recibe automáticamente ayudas por el simple hecho de comprar remolacha, cereal o uva a agricultores subvencionados. En vino, en cambio, sí existe una línea sectorial propia para viticultores, bodegas y otros operadores elegibles. Los impuestos especiales sobre el alcohol y el IVA van por una vía separada y quedan fuera de la PAC.

El mayor vínculo presupuestario está en el vino. La UE reserva 1.061,0 millones de euros por ejercicio financiero a las intervenciones vitivinícolas previstas en el Reglamento 2021/2115. Italia recibe 323,9 millones al año, Francia 269,6 y España 202,1. Entre los tres suman alrededor del 75% del total europeo. A distancia aparecen Portugal, con 62,7 millones; Rumanía, con 45,8; y Alemania, con 37,4.

Ese apoyo llega en un momento de presión para el sector. La Organización Internacional de la Viña y el Vino calcula que la UE produjo 136 millones de hectolitros en 2025, cerca del 60% del vino mundial y un 1,3% menos que en 2024. Italia alcanzó 44,4 millones de hectolitros, Francia 36,1 y España 28,7. España quedó alrededor de un

17% por debajo de su media de cinco años y Francia, un 16%. La OIV también sitúa el consumo mundial en 208 millones de hectolitros, un 2,7% menos que un año antes, y aprecia una reducción de la superficie vitícola. Con ese escenario, Bruselas no solo financia modernización y adaptación al clima: también abre la puerta a reducir capacidad de forma ordenada cuando la demanda no absorbe parte de la oferta.

Desde marzo de 2026, el vino cuenta además con un marco reforzado por el Reglamento (UE) 2026/471. La norma permite intensidades de ayuda de hasta el 80% para algunas inversiones climáticas y ambientales, amplía el enoturismo, alarga las acciones de promoción en terceros países hasta nueve años consecutivos por beneficiario y mercado en los casos previstos, refuerza las medidas frente a plagas y aclara la regulación de los vinos desalcoholizados o de alcohol reducido. También incorpora una ayuda al arranque permanente de viñedos. La aportación de la UE puede cubrir hasta el 70% del coste directo y una estimación de la renta perdida durante un año, con la opción de una contribución nacional adicional. A cambio, el beneficiario queda, por regla general, sin nuevas autorizaciones de plantación durante diez campañas vitivinícolas.

La normativa actual obliga además a dedicar al menos el 5% del gasto vitivinícola a objetivos ambientales, climáticos, de eficiencia energética o de uso de recursos. Junto a las inversiones, siguen presentes herramientas como la reestructuración del viñedo, la cosecha en verde, los seguros, la innovación, la destilación de subproductos y la promoción en países terceros. Ese conjunto de instrumentos no existe con la misma amplitud ni en cerveza ni en bebidas espirituosas.

La cerveza ocupa una posición distinta. No tiene un sobre propio comparable al del vino. Su relación con la PAC pasa por los productores de cebada y otros cereales, por las ayudas de desarrollo rural y, de forma más visible, por el lúpulo. Alemania dispone de una asignación sectorial de 2,188 millones de euros al año para este cultivo, el nexo presupuestario más claro entre la PAC y la cadena cervecera. La normativa permite en ese caso apoyo a asistencia técnica, formación, inversión, producción ecológica o integrada, trazabilidad y adaptación climática.

Los datos del mercado muestran una evolución distinta a la del vino. The Brewers of Europe sitúa la producción comunitaria en 367,4 millones de hectolitros en 2019 y alrededor de 345 millones en 2024. La patronal añade otro descenso del 2,9% en 2025, que deja el volumen en torno a 335 millones de hectolitros. También calcula que unas 10.000 cerveceras mantienen cerca de dos millones de empleos directos e indirectos y 52.000 millones de euros de valor añadido anual. En paralelo, la cerveza sin alcohol aumentó un 5,9% en 2025 y ya representa aproximadamente una de cada doce consumidas en la UE. La propia organización presenta estas magnitudes como cifras sectoriales y no como una medición del efecto de la PAC sobre el negocio ni como una serie estadística cerrada de Eurostat. Sus datos apuntan además a que las exportaciones de cerveza cayeron en 2025 a su nivel más bajo desde 2014.

En bebidas espirituosas, el lazo con la PAC es aún más indirecto. El apoyo llega sobre todo por la vía de la uva, los cereales, la remolacha y otras materias primas agrícolas, además de las inversiones rurales cuando los proyectos cumplen las condiciones fijadas por cada Estado miembro. La regulación del producto descansa, sobre todo, en el Reglamento 2019/787 y en el sistema europeo de indicaciones geográficas reforzado en 2024, que también amplía la protección en internet y en nombres de dominio. spiritsEUROPE sitúa las exportaciones extracomunitarias del sector en 8.840 millones de euros en 2024, un 2% menos que el año anterior. En este caso, una indicación geográfica puede elevar el valor territorial de la bebida, pero no equivale a una ayuda pública.

La siguiente etapa todavía no está cerrada. A este miércoles, 16 de septiembre, ni la PAC 2028-2034 ni el próximo marco financiero plurianual habían sido aprobados de forma definitiva. La Comisión Europea presentó el 16 de julio de 2025 su propuesta para el nuevo periodo y planteó integrar la política agraria en planes nacionales y regionales de asociación dentro de un fondo de unos 865.000 millones de euros. Bruselas reserva al menos 293.700 millones para apoyo a la renta agraria y otros 6.300 millones para una red de seguridad frente a crisis. El texto plantea, además, reducir de forma progresiva el apoyo por superficie a partir de 20.000 euros y fijar un máximo de 100.000 euros por agricultor y año.

Esa cifra no puede compararse de forma automática con los 386.600 millones de la PAC 2021-2027. El perímetro cambia porque parte de las políticas rurales y de inversión pasarían a sobres nacionales y regionales más amplios. Para los sectores de bebidas, la incógnita no es tanto la continuidad de herramientas como la promoción, la innovación, la reestructuración o la gestión del riesgo, sino cuánto dinero llegará a cada una y qué prioridad recibirá en cada capital.

La propuesta comunitaria mantiene intervenciones en vino y lúpulo dentro de la futura Organización Común de Mercados. En el caso del vino figuran inversiones, promoción y marketing, investigación, adaptación climática, análisis de laboratorio, trazabilidad, cosecha en verde, reestructuración del viñedo y destilación de subproductos. El problema para el sector no es la desaparición del menú de medidas, sino que el texto presentado en 2025 no reproduce de forma equivalente los sobres nacionales fijos del vino que existen ahora. Además, la negociación debe encajar ese borrador con la reforma vitivinícola aprobada en 2026, que llegó después de la propuesta inicial.

Para la cerveza y los destilados, el peso de las decisiones nacionales será todavía mayor. El vino seguiría fuera de la ayuda asociada, como ya ocurre en la PAC actual, y conservaría su canal sectorial específico. Cereales, lúpulo y otras materias primas sí podrían seguir recibiendo ayudas asociadas si cada Estado miembro justifica dificultades económicas, sociales o ambientales. Eso significa que una misma cadena de suministro puede quedar más o menos respaldada en función del país y del diseño final de su plan.

La propuesta también reordena la parte ambiental y refuerza la gestión del riesgo. Bruselas quiere ligar más apoyo a prácticas sobre agua, suelo, carbono y biodiversidad, además de impulsar la digitalización y la agricultura de precisión. En paralelo, plantea ayudas para seguros y fondos mutuales con activación, en principio, cuando las pérdidas alcancen al menos el 20% respecto a las referencias históricas. Para viñedo, cebada y lúpulo, sometidos a sequías, lluvias extremas, calor y plagas, ese capítulo puede pesar tanto como las ayudas a la inversión.

Las cifras de producción ayudan a entender por qué esa orientación gana espacio. En el vino, la OIV vincula parte de la volatilidad reciente a sequías, calor extremo, lluvias y enfermedades, al tiempo que cae el consumo mundial. En cerveza, la reducción del volumen convive con el avance de la categoría sin alcohol, lo que desplaza parte del valor hacia la innovación industrial y la marca, ámbitos donde la PAC actúa menos que en la finca. Y en bebidas espirituosas, la protección del origen y la estabilidad del suministro pesan más que la existencia de un programa agrario propio.

Si el calendario comunitario se mantiene, el nuevo periodo arrancará el 1 de enero de 2028. Antes, 2027 será el año en que los Estados miembros deban cerrar sus planes nacionales y regionales y fijar qué parte del dinero reservan a vino, lúpulo, inversiones rurales, promoción exterior y gestión del riesgo.